

## La violencia instrumento político de Petro

Fernando Mora<sup>1</sup>

A lo largo de la historia de Colombia, el país ha atravesado períodos de violencia profunda, originados por disputas partidistas, el conflicto armado, el narcotráfico y la lucha por el control territorial entre diversos actores. Sin embargo, es quizás la primera vez en los últimos 60 años que la violencia se ha consolidado como un elemento central de la estrategia gubernamental bajo la administración de Gustavo Petro.

En las elecciones presidenciales de 2018, Iván Duque fue elegido con el 53,98 % de los votos, frente al 41,8 % de Gustavo Petro, quien asumió su escaño como senador. Según informes, Petro y la oposición habrían recibido apoyo económico de grupos armados ilegales y del crimen organizado a cambio de respaldo político, lo que desestabilizó aún más el país y amenazó la integridad del orden constitucional.

Entre 2018 y 2022, Petro y sus aliados organizaron protestas nacionales que desembocaron en el estallido social de 2021. Aunque se ha sostenido que estas manifestaciones fueron espontáneas y pacíficas, diversas fuentes locales e internacionales destacan la participación de grupos como las disidencias de las FARC, el ELN, la Nueva Marquetalia, el Tren de Aragua y Hezbolá en la intensificación de la violencia de ese período. Además, Petro y sus aliados han mantenido vínculos cercanos con *dictadores como Maduro y con actores ilegales*, lo que plantea serias dudas sobre las implicaciones de estas relaciones en la política colombiana.

Desde su llegada a la presidencia en 2022, Petro ha fomentado una retórica confrontacional, cotidiana y sistemática de *asedio constante*, lo que ha profundizado las divisiones sociales en Colombia. En particular, la vicepresidenta Francia Márquez ha adoptado una postura agresiva hacia la oposición política y la población blanca, erosionando de manera continua la cohesión nacional y la paz social.

Lo más alarmante de esta situación es el uso de la violencia como *herramienta política*. Petro y su administración han impulsado su empleo para presionar a más del 70 % de la población que no comparte sus políticas, al Congreso y a otras instituciones del Estado, lo que representa una amenaza directa al sistema democrático y al Estado de Derecho. Las constantes referencias a la violencia, junto con la deslegitimación de los órganos judiciales y el sistema electoral por parte de Petro y altos funcionarios, contribuyen a generar un ambiente de profunda división y temor.

Por otro lado, la denominada "Paz Total" propuesta por Petro ha facilitado la consolidación de grupos criminales y carteles de narcotráfico que operan en diversas regiones del país, aumentando su poder e influencia sobre el territorio colombiano. En lugar de mejorar la seguridad, esta política ha contribuido a la expansión de la violencia y el narcotráfico, además de socavar la autoridad estatal sobre al menos el 70 % del territorio nacional. *La producción de cocaína ha alcanzado niveles históricos en los dos últimos años*, lo que parece coincidir con las promesas hechas por Petro y sus aliados políticos, como la exalcaldesa de Bogotá, al crimen organizado.

Durante la campaña presidencial, Petro y sus aliados ofrecieron al crimen organizado y a los grupos ilegales, como el ELN, el Clan del Golfo y otros (El Pacto de la Picota), al menos tres compromisos clave: permitirles continuar con sus actividades ilícitas (1), otorgarles dominio territorial (2) e inmunidad absoluta (3). Estas promesas han generado un entorno de impunidad que favorece la expansión de las actividades criminales, perjudicando gravemente la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.

Bajo el liderazgo de Petro, desde 2022, la violencia política en Colombia ha aumentado de manera alarmante. Diversas organizaciones de derechos humanos han documentado un incremento significativo en la violación de estos derechos en distintas regiones del país, especialmente por

<sup>1</sup> He is a global analyst, former adviser for the Americas to the UN Secretary-General on the prevention of conflict and the use

of natural resources, former Latin America director for ICG, and advisor to various prime ministers, presidents and international organizations.

parte de grupos vinculados a su entorno político. El número de masacres en el país se ha triplicado desde su llegada, manteniendo, de manera contradictoria, a los medios de comunicación en un silencio cómplice sobre esta grave violación de los derechos humanos.

La violencia contra niños, adolescentes y mujeres ha alcanzado niveles preocupantes. Bajo el liderazgo de Gustavo Petro, numerosos menores de edad han sido víctimas de homicidios relacionados con el conflicto armado, mientras que los casos de violencia de género han afectado a un número mayor de mujeres en comparación con años anteriores. Además, el aumento del reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado, en el marco de la "Paz Total", es igualmente una preocupación grave. Estos datos reflejan el creciente impacto de la violencia en amplios sectores de la población, generando una profunda inquietud sobre el respeto a los derechos fundamentales y la seguridad de los colombianos en lo que va de su administración.

El apoyo político y logístico que Gustavo Petro y sus aliados han brindado al régimen de Nicolás Maduro, así como a grupos como Hezbolá y Hamás, ha generado temores sobre su respaldo a la violencia, las violaciones de derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales y el fraude electoral en Venezuela. Este apoyo podría acarrear repercusiones geopolíticas significativas para Colombia.

Es importante recordar que Petro ha visitado a Maduro en cinco ocasiones, y en una de esas visitas se hizo una denuncia relacionada con la pérdida de una maleta llena de miles de dólares, atribuida a su exjefa de gabinete. Este incidente ha sembrado dudas sobre los verdaderos fines de las visitas de Petro al régimen venezolano.

Por último, la alianza entre el Gobierno de Petro, el Pacto Histórico y el crimen organizado ha desencadenado una serie de acciones sistemáticas que afectan la soberanía de Colombia. El control territorial de estos grupos, junto con la falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno, ha mantenido al país en una situación de constante asedio, lo que pone en peligro la estabilidad nacional.

Esta estrategia de Petro y sus aliados, de mantener al país en un caos socioeconómico total, busca someterlo al crimen organizado, su principal aliado. El objetivo es mantener al país bajo constante presión para perpetuarse en el poder, permitiendo que sus socios controlen el territorio nacional y sigan delinquiendo sin temor a ser detenidos o perturbados por el gobierno de Petro. Es decir, Petro busca una vez más copiar a su ídolo Maduro y convertir a Colombia en una Venezuela II.

Bogotá, Colombia, March 5, 2025